

ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 17 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por los CC. Lics. Joaquin Montes de Oca y Pablo Mendizabal Ortiz, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, contra un acuerdo de la Legislatura del mismo, concerniente á erigirse en jurado para juzgarlos personalmente, con cuyo acto estiman los quejosos que se han violado en su perjuicio, las garantías consignadas en los arts. 14, 16 y 20 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Que los ciudadanos Lics. Joaquin Montes de Oca, Magistrado propietario, y Pablo Mendizabal Ortiz, supernumerario del II. Tribunal Superior de Justicia del Estado, por su escrito de 2 de Julio último, solicitaron proteccion y amparo de la Justicia federal, contra los acuerdos de la II. Legislatura que los sometió á un juicio de responsabilidad, en virtud de queja establecida contra ellos, por el C. Lic. José María Vardéz, Juez que fué de primera instancia del Canton de

Orizaba, por haber formado con sus votos, mayoría en dicho Tribunal, en sus acuerdos relativos á trasladar á dicho Juez al Canton de Jalapa, para que en él continuara desempeñando la judicatura; cuyos actos reclamados por los quejosos, son contrarios á las garantías que la Constitucion federal otorga al hombre en sus artículos 14, 16 y 20, segun han manifestado; pidiendo á la vez, que por la urgencia notoria del caso, se decretara la suspension inmediata de dichos actos hasta la resolucion de este juicio, como en efecto se decretó, librándose el telégrama correspondiente á la Secretaría de la H. Cámara, para que dando cuenta en el acto, tuviera su esacto cumplimiento lo dispuesto por el Juzgado. Se recibió telégrama de los promoventes en que manifestaron al Juzgado, que la II. Legislatura seguia adelante en su procedimiento, á pesar de la orden de suspension, y se libró nuevo telégrama haciéndole el requerimiento que la ley previene á nombre de la Union, para que se sirviera cumplir con lo mandado; y como esta medida no hubiese sido tampoco obsequiada, sin embargo de haber llegado ambas comunicaciones telegráficas oportunamente á la Secretaría del H. Congreso, segun consta de autos, pronunciándose el veredicto que declaró culpables á los postulantes y suspensos en el ejercicio de sus respectivos empleos, se dirigió otra orden telegráfica para que se tuvieran por suspensos los efectos del propio veredicto, como consecuencia necesaria de lo decretado anteriormente; y no obstante eso, despues de terminadas las funciones del jurado de acusacion, el mismo dia 4 en que las empezó á desempeñar, se publicó en el periódico oficial, por acuerdo del dia 8, que como consecuencia del expresado veredicto quedaban suspensos de los derechos de ciudadanos los Lics. Montes de Oca y Mendizabal Ortiz, por cuyo motivo fué ampliado el recurso de amparo á ese hecho, con fundamento de la desobediencia manifiesta de los derechos del Juzgado.

Antes de este último acontecimiento que vino á demostrar sin la menor duda que la H. Cámara no quiso acatar la suspensión inmediata decretada de los actos reclamados por los quejosos, ni respetar y atender el requerimiento que á nombre de la Union se le hizo con la debida oportunidad, conforme á la ley orgánica y de procedimientos de 26 de Enero de 1869, se comunicó lo actuado y decretado al H. Tribunal Superior de Justicia que estaba ya integrado constitucionalmente, para que teniendo noticia de lo ocurrido en este juicio y de la conducta oficial observada por la H. Legislatura, con respecto á las órdenes que se le libraron, se sirviese tener por suspensos los efectos del veredicto del día 8, y demás actos relativos á él, hasta la terminación de este negocio por la sentencia ejecutoria que debe pronunciar la Suprema Corte de Justicia; y habiéndose obtenido contestación de conformidad, se continuaron los trámites prevenidos por la ley. Evacuando el informe correspondiente que se pidió á la autoridad ejecutora de los actos reclamados, y el de la ampliación del recurso, se recibió á prueba, en cuyo término, produjo el apoderado de los actores las pruebas que creyó conducentes en favor de los derechos de sus representados; y con vista de la actuación, el suscrito Promotor fiscal considera de justicia la solicitud de amparo de que se está ocupando por las razones y fundamentos legales que pasa á exponer:

La queja que ha motivado el procedimiento de la H. Legislatura erigida en jurado de acusación, no ha sido contra los acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia, sino contra los Magistrados que votaron en ellos formando mayoría, porque se ha considerado y con razón, que la H. Cámara no tenía facultades para juzgar al Tribunal en pleno, sino á los Magistrados y fiscal individualmente, con arreglo á los artículos 119, 120 y 121 de la Constitución particular del Estado, concordantes con los artículos 103 y 104 de la federal

de la República, pero como esos mismos Magistrados acusados, al emitir sus votos formaron dichos acuerdos obrando colectivamente, resulta que los individuos desaparecieron en aquellos actos, quedando solamente el cuerpo moral que representa el Supremo poder judicial del Estado, independiente del legislativo y ejecutivo, los mismos que de la propia manera que aquel, responden de sus actos ante el pueblo Veracruzano que los eligió ó constituyó para que cada uno atendiese á los ramos de la administración pública que la Constitución del Estado y leyes secundarias les demarcan.

Por lo mismo, debió esperarse que el H. Congreso no llevara adelante su procedimiento con vista de las razones expuestas por los CC. Licenciados acusados, pues entre ellos hicieron valer en su favor el caso idéntico ocurrido entre el Soberano Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia, cuya protesta se publicó en el periódico "El Progreso", del cual acompaña un ejemplar, para no insertar en este pedimento la constancia á que se refiere.

En ese documento que representa uno de los actos mas dignos y solemnes del Supremo poder judicial de la Nación, y que tanto honra y enaltece á los que lo votaron, encontrará el Juzgado para recordarles, todos los fundamentos en que se apoyó la Suprema Corte, para no reconocer en el Congreso la facultad de juzgar sus actos, cuando procede con aquel carácter de suprema autoridad judicial en sus acuerdos plenos, sean económicos ó judiciales, como funcionan en los juicios de amparo, que son los mismos que militan en el presente caso, atendida la independencia de poderes del Estado, conforme á las instituciones federales que rigen en la República.

En consecuencia, la H. Legislatura si no ha podido juzgar en este caso al H. Tribunal superior de Justicia del Estado cuando funciona en pleno, mucho menos ha podido hacerlo respecto de los individuos que con el carácter de Magistrados votaron los acuer-

dos que motivaron la queja del C. Lic. José M. Valdéz, así porque no han obrado en ellos individual y separadamente para poder responder en las propias condiciones de sus actos, como porque si se admitiese el concepto contrario, podría muy bien resultar en varios casos posibles, que siendo acusados el Presidente, Magistrados y Fiscal que componen el Tribunal en número de seis, los tres supernumerarios no serian bastantes á formar quorum para erigirse en jurado de sentencia, lo que demuestra que no ha sido la mente de la Constitucion del Estado, que la H. Cámara juzgara como jurado de acusacion al H. Tribunal pleno.

No ha sido competente por tanto, para juzgar á los quejosos, por falta de leyes que con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á el por el Tribunal que previamente hubiesen establecido aquellas, autorizasen á la H. Cámara para erigirse en jurado de acusacion en el caso especial que se versa, habiéndoseles violado la garantía individual que les otorga el artículo 14 en su segunda parte de la Constitucion federal, y por consiguiente, la consignada en el artículo 16, por haber sido molestados en sus personas y posesiones por autoridad incompetente, supuesto que los actos del H. Congreso tienden á someterlos á un juicio criminal que afecta á sus personas, privándoles de los derechos de ciudadano y del empleo que poseen legitimamente en virtud de la confianza que en ellos depositó el pueblo, sin tener otro recurso que el de amparo, conforme á los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, por ser irresponsable la H. Legislatura.

En cuanto al modo de proceder, se nota tambien, que con infraccion de la segunda parte del artículo 20 que ordena se tome su declaración preparatoria dentro de 48 horas á todo procesado, se pronunció el veredicto sin llenar aquella formalidad que constituye otra de las garantías que les han sido violadas; demostrando con la festina-

cion de sus actos aquella H. corporacion, que sin embargo de las providencias dictadas por el Juzgado, se había propuesto llevar adelante su intento; que si no fué consumado, ha sido únicamente por las acertadas disposiciones que á su tiempo dictó el Juzgado y por el acatamiento á ellas del H. Tribunal Superior de Justicia.

Por estos fundamentos, y en virtud de lo prevenido en los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pide al Juzgado se sirva amparar á los quejosos contra los actos de la H. Legislatura, que sin duda alguna afectan á sus personas como individuos particulares, siendo así que los ha sometido á un juicio sin tener jurisdiccion en el caso, y los ha declarado culpables con las consecuencias de molestarlos en la posesion que tienen de sus empleos y de los derechos de ciudadanos, por ser así de estricta justicia.

H. Veracruz, 6 de Octubre de 1878.—
Lic. J. M. Lopez de Escalera.

Sentencia del C. Jues de Distrito.

H. Veracruz, Octubre 13 de 1878.—
Visto el juicio en que los CC. Licenciados Joaquin Montes de Oca y Pablo Mendizabal, Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, solicitan por su escrito fecha 2 de Julio próximo pasado, que la justicia federal los ampare y proteja, contra los acuerdos de la H. Legislatura del Estado, que los sometió al juicio de responsabilidad en virtud de la queja interpuesta en contra de sus personas por el C. Lic. José María Valdez, ex-juez de primera instancia del Cantón de Orizaba, porque con sus votos formaron mayoría en dicho Tribunal Superior en los acuerdos relativos en que se dispuso trasladar al expresado ex-juez Valdez al Cantón de Jalapa, para que en él continuase prestando sus servicios en la judicatura; cuyos actos se consideraron como atentatorios á las garantías

que la Constitución les otorga en los artículos 14, 16 y 20, según tienen manifestado en su queja, pidiendo así mismo que por la urgencia del caso se decretase la suspensión inmediata del acto, hasta la resolución definitiva, á lo que se accedió comunicándose lo decretado á la secretaria de la II. Legislatura, para que diese cuenta en el acto, sin que hubiese tenido su debido cumplimiento lo dispuesto por el Juzgado: y no habiendo surtido sus efectos la determinación indicada, ocurrieron los quejosos exponiendo, que á pesar de lo decretado por la autoridad judicial, la H. Legislatura continuaba en el procedimiento, erigida en gran jurado; por lo que se libró nuevo despacho en que se hizo el requerimiento á nombre de los Supremos poderes de la Unión, á fin de que la H. Cámara se sirviese cumplir con lo mandado; y como esta providencia tampoco fué observada, sin embargo de que llegaron las comunicaciones á la secretaria de la II. Cámara con oportunidad, esta continuó en el procedimiento, y pronunció su veredicto declarando culpable á los quejosos, en cuya determinación se declaró igualmente, que los ocurrentes se hayan suspensos de sus respectivos empleos; en consecuencia se dirigió nueva solicitud por los postulantes, y en ella se pidió, que se librase nueva orden para que se suspendiesen los efectos del veredicto, á lo que se accedió; pero en seguida se publicó en el periódico del Gobierno del Estado, por acuerdo de la H. Cámara expedido el día ocho, que como consecuencia del expresado veredicto, los CC. Montes de Oca y Mendizábal Ortiz quedaban suspensos de los derechos de la ciudadanía, por cuyo motivo ampliaron el recurso de amparo, fundándolo en la desobediencia de los decretos, del Juzgado federal; que antes de este último acontecimiento fué librada orden al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que se sirviese tener por suspensos los efectos del veredicto del día 4, y los demás actos derivados de él, hasta que se pronunciase sentencia

definitiva y resolución suprema, cuya disposición fué obsecuada, y se continuó la secuela del juicio, con arreglo á la ley de amparo, y teniéndose presentes las costas de autos, los alegatos de los quejosos, con lo pedido por el Ministerio fiscal.

Considerando: que el Estado de Veracruz siguiendo el sistema constitucional de la Unión, ha establecido la división de los poderes y su absoluta independencia, obrando cada uno en el círculo de sus atribuciones; sin que haya superioridad de uno sobre los demás, y este admirable orden tiene por objeto el que los poderes sean absolutamente independientes; que cada uno de las disposiciones que decretan, tienen el carácter de supremas, lo cual pone fuera de la inspección de cualquiera otra autoridad, por ser iguales en la categoría establecida en la Constitución, y que por estos principios se conserva el orden y armonía entre los poderes supremos, sin que uno de ellos pueda convertirse en Juez del otro, evitándose el que un poder se sobreponga al otro, y chocándose interrumpen el mismo orden constitucional: que á las determinaciones que resultan de los acuerdos de cada uno de los poderes, no puede sobrevenir responsabilidad personal, por que tales disposiciones son supremas, y el carácter moral del poder que las dictara no puede ser responsable, y por consiguiente los individuos que los componen quedan á salvo porque han dejado sus actos consignados en las disposiciones, y estas no están sujetas á la jurisdicción de la Legislatura, ni á ninguna otra autoridad; pues si tal fuera, todos los actos de poder judicial quedarían sujetos á la revisión del Congreso, ya indirectamente, como sucede en el caso propuesto, ya directamente como resultado de animosidades ó de otros principios que se introdujesen, perturbándose así la marcha en la vía constitucional, que haciéndose un examen estricto, del acuerdo levantado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativo á mandar que el C. Lic. Val-

dez, ex-juez de Orizaba, pasase á prestar sus servicios al Juzgado de Jalapa, resulta que dicho acuerdo judicial, antes de llegar á tener este carácter, fué discutido en el Tribunal pleno; que segun el órden legal lo compusieron tres individuos que lo fueron el C. Lic. Muñoz Guerra, presidente, el C. Lic. Montes de Oca y el C. Lic. Mendizabal Ortiz, magistrados, y estos dos últimos votaron porque se aprobase el proyecto de acuerdo propuesto, y el C. Guerra votó en contra; quedó pues aprobada dicha determinacion; no por los CC. Montes de Oca y Mendizabal Ortiz, sino por el H. Tribunal de Justicia, y responsable por sus actos, desapareciendo la individualidad desde el momento en que el acuerdo sobre traslacion de jueces se consideró que tuvo tal caracter; que por los principios vertidos se advierte, que la H. Legislatura del Estado que tantas pruebas tiene dadas del acierto y sabiduria con que ha marcado sus actos, aparece que se ha erigido en gran jurado para conocer de la acusacion interpuesta por el C. ex-juez Valdez, contra los Magistrados Montes de Oca y Mendizabal, violando así las garantías que les otorgan los artículos 14, 16 y 20 de la Constitucion federal, por no haber estos obrado individualmente en el caso que motivó la queja. Por estos fundamentos, y con arreglo á lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869 y artículos constitucionales ya citados, y de conformidad con lo pedido por el Ministerio fiscal, se falla. Primero: la Justicia federal ampara y protege á los CC. Licenciados Joaquin Montes de Oca y Pablo Mendizabal Ortiz, contra lo dispuesto en los actos de la H. Legislatura del Estado, dictados contra sus personas, para exigirles la responsabilidad. Segundo: notifíquese este fallo; sáquense las copias prevenidas por la ley para su publicacion en el Progreso y Semanario Judicial, elevándose estos autos en revision á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Así lo pronunció y firma el C. Juez segundo suplente del Juzgado de Distrito del Es-

tado, con los de su asistencia, que damos fé. *Lic. José María de Manero y Embides.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia que certifico. *Heróica Veracruz, Octubre 15 de 1873.*—*José María de Manero y Embides.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 18 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por los CC. Lics. Joaquin Montes de Oca y Pablo Mendizabal Ortiz, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, contra el acuerdo de la Legislatura del mismo, concerniente á erigirse en jurado para juzgarlos personalmente, con cuyo acto estiman los quejosos que se han violado en su perjuicio las garantías consignadas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitucion federal.

Considerando: que si bien se halla establecida tanto en la Constitucion de la República Mexicana como en las particulares de los Estados, la division de poderes y su absoluta independencia, obrando cada uno en el círculo de sus atribuciones, no puede deducirse de ahí la irresponsabilidad de los funcionarios públicos de que esos mismos poderes se componen.

Considerando: que para conciliar ambos principios, es natural y lógico la distincion de que los actos de un poder Supremo, que obra dentro de la órbita de sus facultades, no quedan sujetos á la revision de ninguna otra autoridad, ni hacen responsables como entidad colectiva á la que los ejecutó, sin que por eso dejen de ser responsables, en su caso y personalmente, los miembros de ese mismo poder Supremo.

Considerando: que con arreglo á la distincion mencionada, á la vez que son siempre irresponsables, en su caracter colectivo,

el Congreso de la Union, el Ejecutivo de la misma, y el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia, son personalmente responsables, por los delitos, faltas ú omisiones en que incurran en el ejercicio de su encargo, los diputados al Congreso de la Union, los Secretarios del despacho, el Presidente de la República con restricciones especiales, y los individuos de la Suprema Corte de Justicia, segun todo está prevenido en el artículo 103 de la Constitucion de 5 de Febrero de 1857.

Considerando: que por idénticas razones aplicadas á las autoridades Supremas de los Estados, son irresponsables en su caracter colectivo, las Legislaturas, los Gobiernos y los Tribunales Superiores de cada uno de ellos, á la vez que personalmente responsables por los delitos, faltas ú omisiones en que incurran en el ejercicio de su encargo, los Diputados á las Legislaturas, los Gobernadores y Secretarios del despacho, y los Magistrados de los Tribunales Superiores.

Considerando: que sería ilegal, absurdo y peligrosísimo, sancionar en algun caso la irresponsabilidad personal de un funcionario público, porque esto equivaldria á expedirle una patente de impunidad para los delitos, faltas ú omisiones que cometiera en el ejercicio de su encargo.

Considerando: que de la aplicacion de los anteriores principios á los Tribunales plenos, resultan los siguientes corolarios: que sus actos, ejercidos en el círculo de sus atribuciones, no están sujetos á la revision de ningun otro poder; que los mismos Tribunales, como entidad colectiva, son irresponsables, y que son responsables personalmente los Magistrados que los forman, por los delitos, faltas ú omisiones, en que como ministros de esos Tribunales incurran en el ejercicio de su encargo.

Considerando: que en el caso de los CC. Licenciados Joaquin Montes de Oca y Pablo Mendizabal Ortiz, no puede sostenerse supuesta la verdad de las presuntas aseve-

raciones, que por el simple hecho de haber formado la mayoría del Tribunal pleno del Estado de Veracruz, al acordar que el Juez de Orizaba pasase á prestar sus servicios al Juzgado de Jalapa, quedasen libres de toda responsabilidad personal, aun cuando hubieran incurrido en delitos, faltas ú omisiones, en el desempeño de su encargo.

Considerando: que acusados precisamente esos dos Magistrados de un delito oficial, cual es la infraccion del artículo 141 de la Constitucion del Estado de Veracruz, se presentó el caso de que por la autoridad competente se examinase y resolviera si era ó no fundada la acusacion, cuya admision ha procedido por no ser aceptable el principio de la irresponsabilidad.

Considerando: que de lo expuesto se deduce no haber sido violada ninguna de las garantías mencionadas por los quejosos; no la del artículo 14, por estar dada con anterioridad al hecho, y ser exactamente aplicable á él la disposicion expresa de la Constitucion del Estado de Veracruz, que faculta á la Legislatura para conocer de las acusaciones presentadas contra los Magistrados del Tribunal Superior; no la del artículo 16, por ser notoria, en virtud de la propia disposicion, la competencia de la Legislatura; y no la del artículo 20, por no haberse comprobado que se haya infringido ninguna de las prescripciones que comprende.

Por tales consideraciones y fundamentos, se resuelve; Primero: que se revoca la sentencia pronunciada el 13 de Octubre próximo pasado por el Juez de Distrito de Veracruz, en la que se amparó á los CC. Lic. Joaquin Montes de Oca y Pablo Mendizabal Ortiz, contra los actos de la Legislatura del Estado, relativos á juzgarlos personalmente con motivo de la acusacion que se les ha hecho, de haber infringido el artículo 141 de la Constitucion del mismo. Segundo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á dichos Magistrados contra tales actos.—Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á re-

vision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 25 de Noviembre de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por Telésforo Delgado, Antonio y Abundio Arenas, contra el Juez suplente de Paz, por haberlos aprehendido sin orden escrita de la autoridad competente, y contra el Juez de primera instancia por no haberles hecho aun saber el auto motivado de prision.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Telésforo Delgado, Antonio y Abundio Arenas, se han presentado á ese Juzgado, promoviendo este juicio de amparo y solicitando la proteccion de la justicia federal, porque aseguran, que encontrándose en prision, se han violado en sus personas las garantías que se consignan en los artículos 16 y 19 de la Constitucion general de la República, respecto de aquel artículo, porque no se libró la orden para

reducirlos á prision, por autoridad competente, pues no lo es el Juez de Paz que la ejecutó; y en cuanto al segundo, porque hasta la fecha de su presentacion habian pasado cuatro dias sin que se les hiciera saber el auto motivado de prision. Concluyen pidiendo la suspension inmediata del acto reclamado, que estiman urgente, por depender su subsistencia y la de la familia del primero de los quejosos del trabajo personal de uno y otros. El Juzgado para resolver lo conveniente, hizo que los peticionarios fijaran, por no haberlo precisado en su queja, la autoridad responsable del acto, y de ello resultó con toda claridad, ser el Juez primero de primera instancia á cuyo conocimiento están sometidos desde el dia siguiente á su aprehension.

Pedido el informe respectivo á este funcionario, aparecen referidos los siguientes hechos: que el relacionado Juez, anima una averiguacion criminal por homicidio de Juan Arenas: que en ella resultan complicados como partícipes, Delgado y los otros dos peticionarios: que el mismo Juez libró orden escrita el 16 del corriente mes, para su aprehension, y que conseguida que fué el 19, el 20 se dejaron á su disposicion habiendo decretado y notificado su formal prision el dia 22, inmediatamente despues de cuya fecha los quejosos interpusieron el recurso de apelacion de esa providencia.

De estos antecedentes se desprende, que no es exacta la violacion de garantías, así por el modo con que se mandó hacer la aprehension por autoridad competente, cuanto por la declaracion de bien presos, atendido el tiempo de su consignacion y en el que se dictó el auto; supuesto no haber dejado transcurrir entre uno y otro, el de tres dias que designa para esos casos el artículo 19 constitucional.

Al parecer no procede, por tanto, el amparo, y consiguientemente ni la suspension inmediata del acto reclamado; pero debiéndose limitar el suscrito á este último punto, dice, que no es del caso hacer esa suspen-